

eF Cosas de la vida

SOCIEDAD

La protección de la infancia

Cerco a la gestión privada de los centros de menores tutelados

Los sindicatos y políticos denuncian la atención que dan entidades y fundaciones

Los espacios residenciales perciben al mes por niño entre 3.000 y 4.000 euros

TERESA PÉREZ
BARCELONA

Sindicatos y diputados del Parlament de Catalunya claman contra el funcionamiento de los centros de menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El sindicato UGT dio ayer un severo rapapolvo a la DGAIA, que depende de la Conselleria d'Afers Socials, «por la mala gestión de entidades y fundaciones puramente mercantilistas». Del centenar de Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) de Catalunya, solo el 10% son públicos, el resto son privados o de gestión delegada (el edificio es de la Administración).

Estas críticas se suman a las de la Confederació General del Treball contra el responsable de la DGAIA, Ricard Calvo, por «adjudicar y favorecer» a la fundación Plataforma Educativa, «en la que había tenido cargos», con contratos por valor de 98 millones para gestionar centros en los próximos ocho años.

La UGT ha denunciado ante la Generalitat y el Síndic de Greuges que en algunos de los centros privados «comen y cenan de catering de baja calidad». Lo mismo sucede con la ropa que, a veces, «es de segunda mano». Además, señala el sindicato, no se realizan actividades extraescolares ni lúdicas si no son gratuitas. Y los chava-

otra reunión

LA COMISIÓN DE LA INFANCIA

La comisión que debe revisar el modelo de protección de la infancia y adolescencia en Catalunya se reunirá mañana, viernes, por segunda vez, para comenzar a trabajar, tras un primer encuentro preliminar.

La constitución de este organismo creado a instancias del Parlament se realizó con mes y medio de retraso.

El grupo lo constituyen representantes de los grupos políticos en la Cámara catalana y representantes de la Administración. Ahora, falta por concretar el listado y la fecha en la que diferentes expertos en temas de infancia darán su visión para mejorar el modelo actual.

El primer encuentro se realizó a finales de mayo en la sede de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

les con graves discapacidades físicas o psíquicas «no reciben la atención individual que necesitan». CCOO añade otro dato: «La DGAIA no ejerce un control exhaustivo sobre las empresas en las que ha delegado la gestión. El director del centro sabe el día y la hora en que va a pasar el inspector».

Por todo ello, el sindicato UGT ha exigido a la DGAIA que se marque como prioridad «el seguimiento y la vigilancia de estas fundaciones» y censura que la dirección general no actúe como encargada de «velar y proteger a estos niños en situación de especial vulnerabilidad». Según consta en un documento con membrete de la Generalitat, esta abona entre 3.000 y 4.000 euros mensuales por chaval (entre 108 y 134 euros diarios), en función del número de plazas del centro. En estos espacios viven unos 3.000 chavales.

CIRCULAR // Una circular a la que ha tenido acceso este diario alerta de que «no es posible recibir comida u otro material a través de entidades benéficas, ya que este aspecto queda cubierto por la Administración». Sin embargo, la UGT afirma haber constatado que, en ocasiones, se ha llegado «a utilizar comida de donaciones del Banc dels Aliments o de la Cruz Roja».

Afers Socials recuerda que en los centros públicos no se permite «la comida de beneficencia» y que cada cen-



NIÑOS La habitación de los más pequeños en el centro María Asumpta, de Badalona.



UGT

SINDICATO

«En algunos centros privados comen y cenan de catering de baja calidad, y la ropa, a veces, es de segunda mano»

Antonio Gutiérrez

ACCIÓN SOCIAL DE UGT

«Algunos establecimientos llevan el catering el viernes hasta el lunes y hay que dejar alimentos fuera de la nevera»

radiografía

Aprodeme denunciará el sistema

La Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), con sede en Barcelona, acordó el martes en una asamblea presentar en septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante el Parlamento Europeo «contra el sistema de protección de menores». La entidad argumenta que, con la excusa

de proteger a los niños, «se rompe sistemáticamente a familias, separando a los menores de las mismas, en la mayoría de los casos de forma abusiva y brutal». La demanda la tramita Enrique Vila, uno de los abogados que se encargan del caso de los niños robados en el franquismo. A esta iniciativa a la que se han sumado otras tres entidades se han adherido un total de 120 familias que reclaman el poder recuperar a sus pequeños. Los afectados exigen que en las retiradas intervenga un juez, ya que solamente es una resolución administrativa.

Problemas en el día a día en los centros

Los educadores que trabajan en los centros reconocen la «gran tensión» que existe en el interior. «La capacidad del sistema y también la de los educadores está tocando techo», denuncian. Los colchones, ante la falta de camas, se colocan en el suelo para que puedan dormir y algunas estancias para uso

educativo o lúdico se han convertido, mediante hamacas, en improvisados dormitorios, señalan. Los educadores aseguran que tan solo pueden «realizar una acción asistencial y no educativa por la falta de medios. Además, muchos adolescentes recién llegados únicamente hablan francés y estamos todo el día con el traductor de Google para saber qué quieren». Los trabajadores consideran que se «vive una situación peligrosa porque se ha cronificado y sin haber solucionado los antiguos problemas han surgido otros nuevos».

Incidentes diarios por la sobreocupación

Los incidentes en los centros son frecuentes, entre otras razones por la sobreocupación y la convivencia en un mismo espacio de niños pequeños con otros niños y con diversas patologías. Algunos casos como tiros al aire para hacer a un chaval, uso de arma blanca por parte de dos chicos de 12 años.

GRAN BARCELONA ▶ Colau emprende en solitario el trámite del tranvía → P. 38



DISTRITOS ▶ Associació Lectura Fàcil, libros para todos en Ciutat Vella → P. 44

<<<

LA APUESTA FERROVIARIA

Clamor para que el corredor del Mediterráneo tenga calendario

Los empresarios estallan en Tarragona contra las previsiones incumplidas

El coordinador de la infraestructura dice que muchos tramos se acabarán en el 2020

ESTHER CELMA
TARRAGONA

El reivindicado corredor del Mediterráneo, que recorrerá el litoral europeo desde Algeciras hasta Estocolmo, debería estar operativo en el 2030, según los planes de la Unión Europea sobre los nueve ejes ferroviarios estratégicos. Sin embargo, en el caso de España, el corredor ha sufrido tantos retrasos que ayer el lobi empresarial Ferrmed, la potente patronal química tarraconense e instituciones y agentes socioeconómicos emitieron la llamada Declaración de Tarragona en una conferencia celebrada en el puerto de esta ciudad.

La conferencia reunió a instituciones y agentes socioeconómicos que reivindican el corredor para situarse en el mapa logístico mundial y captar o consolidar nuevas inversiones ahora congeladas. Este encuentro se repetirá el próximo mes de octubre en París.

«Necesitamos un calendario de trabajo claro más que previsiones que se van incumpliendo», aseguró el presidente de Ferrmed, Joan Amorós.

El Ministerio de Fomento prometió que el tramo tarraconense estaría operativo en el 2015, recordaba. Dos años después, sigue en obras y los 40 kilómetros del tramo Vandellòs-Tarragona continúan siendo de vía única, lo que significa que puede pasar solo un tren en un solo sentido y el resto, deben esperar a que finalice. España tiene seis de los 12 puertos europeos que conectará el corredor del Mediterráneo. Pese a esta concentración estratégica, ni uno solo de ellos tiene acceso aún al ancho de vía europeo, lamentó Amorós.

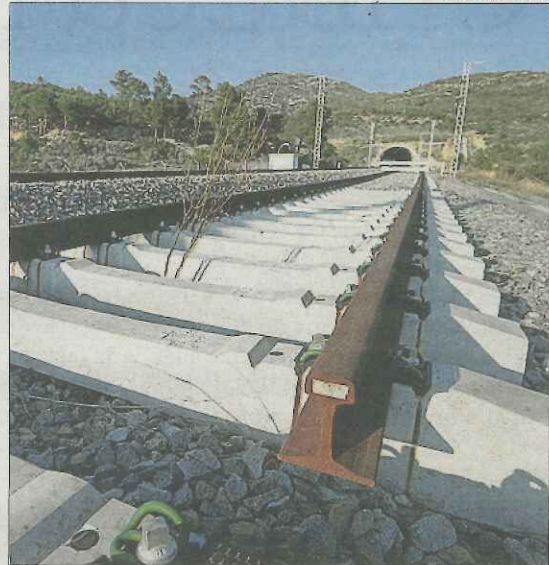
A pesar de lo atrasados que están los deberes, no todo es negro. Por primera vez se cuenta con la figura de un coordinador designado por Fo-

mento: Juan Barios. En su ponencia en Tarragona, Barios aseguró que entre el 2019 y el 2020 muchos de los tramos españoles ahora pendientes estarán ya operativos, entre ellos, el reivindicado tramo entre Vila-seca y Castellbisbal.

A Ferrmed y al presidente del puerto de Tarragona, Josep Andreu, les preocupa especialmente el tramo entre Barcelona y Valencia, cuyos dos puertos concentran más de la mitad del tráfico de contenedores -el de mayor valor añadido- de toda España y que siguen aislados.

Tanto tarda en solucionarse que

JUAN REVILLAS



► Obras paradas en Vandellòs.

los remedios llegan, además de tarde, mal. Amorós prevé un colapso entre Valencia y la frontera francesa porque «todo tendrá que pasar por el mismo lugar: trenes de alta velocidad, de media distancia, cercanías y trenes de mercancías».

La Declaración de Tarragona pide que la Unión Europea considere la cornurbación Tarragona-Barcelona como un nodo estratégico para que sea prioritario, ya que es un cruce entre dos ejes, el del Mediterráneo y el del Ebro, tal como se consideran ya los casos de Madrid, Lyon, Milán, Verona, Venecia y Budapest. También reclama un plan de trabajo concreto para calendarizar la conversión de las vías a ancho internacional. =

JULIO CARBÓ



tro tiene asignado un presupuesto en invierno y verano para ropa.

Antonio Gutiérrez, responsable de Acción Social de UGT de centros privados, critica el tipo de comida hasta el punto de que «educadores que atienden a los chavales les dicen que coman lo que quieran». Hay establecimientos que llevan el catering «el viernes hasta el lunes al mediodía y hay que dejar alimentos fuera de la nevera por falta de espacio en los frigoríficos». Gutiérrez cita a la fundación Idea, «que además de las irregularidades denunciadas en la atención infantil, incumple el convenio laboral e impide la representación sindical».

Rafel Redondo, coordinadora del sector de intervención Social de CCOO, reclama «transparencia» en la gestión económica, en qué y cómo se gasta el dinero. Además reivindica que la Administración «dote de más recursos a los centros y no a las empresas», y que los educadores sociales tengan protección jurídica «para evitar que los despidan si denuncian irregularidades».

LOS PRIVADOS // Tanto las diputadas Gemma Lienas, del grupo Catalunya Sí Que Es Pot, como Gabriela Serra, de la CUP, critican el funcionamiento de los centros de menores de gestión privada y reconocen las diferencias que hay con los públicos, por eso reclaman que sean de titularidad pública. Lienas censura que «se incumplan las ratios de educador por niño, lo que imposibilita que se dé una buena atención».

Serra se pregunta cómo puede la Generalitat «retirar a los niños de su familia y asumir la tutela y una vez que la tiene, dejar al niño en un centro de gestión privada donde no están garantizadas las normas de acogida». La diputada de la CUP reclama que los centros sean lo más parecidos a un hogar «porque a los niños les tienes que dar algo mejor que lo que tenían en su casa para justificar la retirada, si no es mejor no hacerlo. Es inaceptable que un niño retirado duerma en el suelo porque el centro no tiene más camas». =

Gemma Lienas

DIPUTADA DE CSQP

«Se incumplen las ratios de educador por niño, lo que imposibilita que se dé una buena atención a los tutelados»

Gabriela Serra

CUP

«A los niños se les tiene que dar algo mejor que lo que tenían en su casa para justificar la retirada, sino es mejor no hacerlo»

un incendio, al parecer provocado, y la fuga de un menor descolgándose con sábanas por la ventana del segundo piso y que se saldó con una rotura de cadera son los últimos sucesos que han salido a la luz. Las agresiones tanto a los trabajadores como entre los chavales se producen casi a diario. Los sindicatos denuncian que «se suele producir al menos una diaria». Hay chavales que no ven la necesidad de que les proteja la Administración; por tanto, son difíciles de reconducir porque «no entienden por qué están en los centros, ni para qué».

Los tipos de residencias para acogidas

Los centros de acogida, los Residenciales de Acción Educativa (CRAE) y los Residenciales de Educación Intensiva (CREI) son algunos de los espacios adonde van los menores retirados a sus familias por la Administración. Los de acogida son, en teoría, de estancia temporal, hasta que los técnicos realizan un diag-

nóstico sobre el niño. Según admitió la consellera de Afers Socials, Dolors Bassa, en el Parlament el pasado 13 de junio, los centros para tutelados están en una «situación límite». Bassa lo atribuyó a que se ha duplicado la llegada de menores extranjeros en los últimos tiempos y los sindicatos atribuyen esa situación a la falta de personal. Los CRAE acogen a chavales de cero a 18 años y los gestiona la Administración o entidades privadas. En los CREI están adolescentes de 12 a 18 años con problemas de conducta.